



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. general
31 de enero de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de examen de la aplicación
Tercer período de sesiones
Viena, 18 a 22 de junio de 2012
Tema 2 del programa provisional*
**Examen de la aplicación de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción**

Resúmenes

Nota de la Secretaría

Adición

Índice

	<i>Página</i>
II. Resúmenes	2
Jordania	2
Santo Tomé y Príncipe	14

* CAC/COSP/IRG/2012/1.



II. Resúmenes

Jordania

Ordenamiento jurídico

Jordania firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 9 de diciembre de 2003 y la ratificó el 24 de febrero de 2005. La legislación de aplicación de la Convención -Ley núm. 28 de 2004- fue aprobada por el Parlamento el 8 de junio de 2004 y publicada en el Diario Oficial el 1 de agosto del mismo año. La Ley estipula que la Convención es válida y eficaz para todos los fines previstos en ella, y que el Primer Ministro y los Ministros son los responsables de aplicar sus disposiciones.

Conclusiones generales

Los principales pilares del marco jurídico de Jordania para hacer frente a la corrupción son el Código Penal, la Ley Anticorrupción, la Ley contra el Blanqueo de Dinero, la Ley sobre el Derecho de Acceso a Información, la Ley de Delitos Económicos, la Ley sobre el Defensor del Pueblo y la Ley de Información Financiera.

Jordania también ha establecido un marco institucional para hacer frente a los problemas planteados por la corrupción. Existen distintos organismos especializados con mandatos especiales, tales como la Comisión Anticorrupción, la Oficina de Auditoría, la Comisión del Mercado de Valores de Jordania, la Oficina del Defensor del Pueblo, el Departamento de Información Financiera, la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, las oficinas de inspección (órganos de control interno dentro de cada ministerio), los Ministerios de Justicia e Interior, el Consejo del Poder Judicial, la Dirección General de Seguridad y la Oficina del Fiscal General de la Nación.

La Comisión Anticorrupción, creada en 2007, se encarga de coordinar y establecer una política integral de prevención y lucha contra la corrupción en los sectores público y privado. La Comisión se puso en marcha en 2008.

La labor de la Comisión Anticorrupción se basa en la Estrategia Nacional Anticorrupción 2008-2012, que se organiza en torno a seis objetivos principales: desarrollo de la capacidad de la Comisión Anticorrupción; prevención de la corrupción; educación, formación y sensibilización de la población; aplicación de la ley; coordinación de los programas anticorrupción; y cooperación internacional.

En sus conclusiones, los miembros del grupo de examen señalan varias prácticas óptimas, tales como desarrollar una estrategia anticorrupción de amplio alcance y separar la fiscalía general del Estado de la oficina del ministro de justicia para asegurar que la fiscalía goce de un alto grado de independencia.

El examen también reveló la existencia de una serie de asuntos que deben abordarse, como por ejemplo, mejorar la coordinación entre las instituciones nacionales a la hora de aplicar la Convención. También es preciso aplicar de forma sistemática las disposiciones en ella contenidas, utilizando medios administrativos y legislativos, según proceda. Por último, Jordania señaló que necesitaba asistencia técnica en

áreas tales como la redacción de textos legislativos, la realización de investigaciones conjuntas y la creación de capacidad en general.

Penalización y aplicación de la ley

Penalización

Jordania ha adoptado medidas legislativas para penalizar el soborno de funcionarios públicos tanto en su forma activa como en su forma pasiva. El artículo 2 de la Ley de delitos económicos define el concepto de “funcionario público” en un sentido amplio.

Los miembros del grupo de examen tomaron nota de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Casación, y señalaron que una definición más precisa de “función oficial”, ya sea en la legislación o en la jurisprudencia, facilitaría el enjuiciamiento satisfactorio de los delitos. El desarrollo sistemático de una jurisprudencia que permita especificar si es preciso que las actuaciones de un funcionario público entren en el ámbito de sus funciones, o si únicamente basta con que este tenga alguna relación con ellas, también puede ser una alternativa.

Las autoridades jordanas indicaron que el artículo 16 de la Convención no ha sido integrado en su ordenamiento jurídico interno, debido a que la penalización del soborno de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales públicas está en contradicción con la inmunidad ofrecida a los funcionarios públicos internacionales en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, en la que Jordania es parte desde el 1 de junio de 2008. Ahora bien, el grupo de examen estima que Jordania podría aplicar, al menos, el párrafo 1 del artículo 16, relativo al soborno activo de tales funcionarios por ciudadanos y residentes que no gocen de inmunidad diplomática. En una fase posterior del proceso de examen (septiembre de 2011), las autoridades jordanas se refirieron a la nueva reforma de la Ley sobre la Comisión Anticorrupción, que aún estaba siendo debatida en el Parlamento y establece la penalización del soborno, activo y pasivo, de funcionarios públicos extranjeros, incluidos los funcionarios de organizaciones internacionales, salvo que tengan inmunidad diplomática. En ese sentido y con relación al párrafo 2 del artículo 16 de la Convención contra la Corrupción, las autoridades jordanas solicitaron asistencia técnica, en caso de que las modificaciones no fueran aprobadas, en lo que respecta a un resumen de prácticas óptimas y enseñanzas extraídas, y a la redacción de textos legislativos.

En sus conclusiones, el grupo de examen señala que el artículo 422 del Código Penal prevé todos los supuestos contenidos en el artículo 17 de la Convención (malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público). Dado que, según el mismo artículo, “cualquier persona” puede ser autor de esos delitos, todos los supuestos previstos en el artículo 22 de la Convención (malversación o peculado de bienes en el sector privado) quedan, pues, contemplados.

Jordania informó de que el mismo conjunto de disposiciones legales fue utilizado para tipificar como delito el soborno y el tráfico de influencias, tanto en su forma activa como pasiva. Si bien los miembros del grupo de examen reconocieron el carácter facultativo del artículo 18 de la Convención, señalaron con preocupación la falta de distinción real entre los dos delitos en la legislación interna.

En lo tocante a la adaptación del artículo 19 de la Convención (Abuso de funciones), el derecho jordano es amplio, dado que el “beneficio indebido” no es un elemento constitutivo de delito en la legislación nacional.

Jordania confirma la penalización del enriquecimiento ilícito en el artículo 6 de la Ley de Información Financiera de 2006, que establece los criterios para la declaración de patrimonio y las sanciones por no declararlo. La ley prevé el decomiso de bienes ilícitos y no establece límites para conservar la documentación relativa a los bienes declarados, aunque se ha presentado una propuesta para fijar un plazo de cinco años.

El Departamento de Información Financiera, ubicado en el Ministerio de Justicia, es el encargado de garantizar que los funcionarios públicos hacen declaraciones de patrimonio. Durante la visita al país, las autoridades jordanas subrayaron que, si bien ese tema no estaba incluido en el ámbito del actual ciclo de examen de la aplicación de la Convención, necesitaban asistencia técnica para formular una nueva ley que dotara al Departamento de Información Financiera de las competencias necesarias para verificar la información contenida en las declaraciones de bienes.

El grupo de examen señaló que la legislación jordana, en particular los artículos 171 y 173 del Código Penal, no plasmaba en su totalidad la conducta constitutiva de soborno en el sector privado, debido al significado restringido del término “toda persona”, tal como se utiliza en el artículo 170 del Código Penal. En una fase posterior del proceso de examen (septiembre de 2011), las autoridades jordanas informaron de que la nueva reforma de la Ley sobre la Comisión Anticorrupción, que aún estaba siendo debatida en el Parlamento, preveía la penalización del soborno en el sector privado.

La Ley contra el blanqueo de dinero de 2007 fue modificada en mayo de 2010 para subsanar las deficiencias observadas en el régimen interno contra el blanqueo de dinero, así como para dotar de autonomía administrativa y financiera a la Unidad de Inteligencia Financiera de Jordania. La legislación contra el blanqueo de dinero prevé un amplio espectro de delitos determinantes.

La legislación jordana penaliza por una parte los actos que tienen repercusiones negativas en la administración adecuada e imparcial de la justicia (delitos contra la administración judicial y delitos contra la acción de la justicia) pero, por la otra, no parece cumplir plenamente ni con exactitud los requisitos previstos en el artículo 25 de la Convención, en el sentido de tipificar como delito un amplio espectro de conductas específicas que tienen por efecto la obstrucción de la justicia.

Aunque reconocen el gran esfuerzo realizado por Jordania para lograr que su ordenamiento jurídico nacional cumpla con las disposiciones sobre penalización contenidas en la Convención, los miembros del grupo de examen indicaron la existencia de una serie de deficiencias o razones para seguir mejorando, y señalaron las siguientes cuestiones a la atención de las autoridades jordanas competentes. Convendría:

- Describir los delitos de soborno activo y pasivo de funcionarios públicos nacionales de manera que se proporcione una definición más precisa de su “función oficial”. A los efectos de permitir un enjuiciamiento satisfactorio y eficaz, conviene desarrollar una jurisprudencia sistemática que permita especificar si es preciso que las actuaciones de los funcionarios públicos

entren en el ámbito de sus funciones o si únicamente basta con que estos tengan alguna relación con las mismas.

- Seguir esforzándose y terminar el trabajo en curso conducente a garantizar que la disposición obligatoria del párrafo 1 del artículo 16 de la Convención relativa a la penalización del soborno activo de funcionarios públicos extranjeros sea incorporada y aplicada a nivel nacional de forma efectiva.
- Seguir trabajando para terminar de actualizar la legislación interna, con miras a penalizar el soborno en el sector privado, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, con el fin de incluir a las sociedades privadas y anónimas que no tengan acceso a fondos públicos.
- Considerar la posibilidad de penalizar la malversación o la apropiación indebida con arreglo a lo previsto en el artículo 22 de la Convención, ampliando el alcance de la legislación en vigor, con el fin de englobar a todos los subsectores de las entidades privadas.
- Seguir trabajando para terminar de actualizar la legislación nacional, con miras a penalizar el soborno pasivo de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales públicas.
- Cerciorarse de que la obstrucción de la justicia se penaliza mediante disposiciones penales especiales que se ajusten plenamente a las disposiciones específicas establecidas en el artículo 25 de la Convención.
- Estudiar la posibilidad de tipificar como delito el tráfico de influencias como acto de corrupción independiente, distinto del delito de soborno.

Aplicación de la ley

Las sanciones aplicables a las personas que hayan cometido delitos de corrupción parecen ser suficientemente disuasivas, teniendo en cuenta la pena máxima aplicable. Las autoridades jordanas aclararon que según el Código Penal, por “prisión provisional” se entiende una pena de 3 a 20 años, salvo que otro artículo del Código disponga otra cosa. En términos generales, se estimó que la legislación nacional de Jordania se ajusta al artículo 29 de la Convención en lo relativo a la prescripción de delitos.

Jordania ha decidido poner en marcha un régimen jurídico para el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas en la comisión de los delitos previstos en la Convención contra la Corrupción. En ese contexto, las sanciones impuestas incluyen multas a personas jurídicas, así como la suspensión o disolución de la entidad jurídica de que se trate. No hay diferenciación entre personas físicas y jurídicas en lo que respecta a la responsabilidad civil por daños ocasionados a un tercero.

La Comisión Anticorrupción puede investigar cualquier caso de corrupción, bien por iniciativa propia o basándose en la información aportada por cualquier parte. La Comisión también puede incautarse de bienes, e imponer la prohibición de viajar y la suspensión de empleo y sueldo. La Comisión Anticorrupción es un organismo nuevo que entró en funcionamiento en 2008, si bien cabe destacar que en los primeros diez meses de ese año, examinó 465 casos y remitió 82 casos a los

tribunales o a otras instituciones pertinentes. En 2009, examinó 834 casos, y 890 en 2010.

Además, la Dirección General de Seguridad es responsable de la prevención e investigación de delitos, incluidos los de corrupción, y de la detención y enjuiciamiento de sus autores. La Dirección General de Seguridad colabora con la Comisión Anticorrupción en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción. Con el fin de llevar a cabo sus funciones con eficacia, la Dirección General suele utilizar técnicas especiales de investigación, como la vigilancia y el análisis forense, y aporta pruebas a la Comisión cuando lo solicita. En 2010, la Dirección General de Seguridad proporcionó diez informes a la Comisión Anticorrupción.

El artículo 97 de la Constitución garantiza la independencia del poder judicial. Si bien el Rey debe aprobar el nombramiento y la destitución de los jueces, en la práctica estos tienen independencia del gobierno y únicamente son supervisados por el Consejo del Poder Judicial y la Dirección de Inspección Judicial. En una fase posterior del proceso de examen (septiembre de 2011), las autoridades jordanas se refirieron a una nueva reforma de la Constitución, cuyo objeto es aumentar la independencia de la judicatura. La reforma irá seguida de una serie de actos legislativos que modificarán la actual Ley de independencia de la judicatura, con el fin de reflejar esa independencia.

El Consejo del Poder Judicial tiene por cometido nombrar, promover, trasladar y sancionar a los funcionarios judiciales. No hay jueces designados específicamente para ocuparse de los casos de corrupción y, actualmente, los jueces no reciben formación especial en materia de lucha contra la corrupción. Si bien los jueces gozan de inmunidad, el Consejo del Poder Judicial tiene autoridad para levantar dicha inmunidad y someter el caso al Fiscal General, si lo estima necesario. Hasta ahora, no se ha producido ningún caso de esas características. El Consejo del Poder Judicial está facultado para inhabilitar a un funcionario judicial en un plazo de tres años a partir de su nombramiento, si ese funcionario es declarado culpable de un delito cometido con anterioridad a ese nombramiento.

El Fiscal General supervisa el ministerio público y, en lo que atañe a la corrupción, adscribe a fiscales al servicio de la Comisión Anticorrupción. La supervisión del Ministerio de Justicia únicamente es administrativa, y, por tanto, no interviene en las funciones de la fiscalía. Existe un código de conducta que se aplica tanto a jueces como a fiscales. Las condiciones de servicio de los jueces y los fiscales son las mismas.

Jordania ha puesto en marcha un eficaz régimen interno para el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de bienes derivados de delitos de corrupción. No existe un marco para el decomiso en ausencia de condena, pero la víctima del delito puede iniciar un procedimiento de decomiso civil. Cuando un acusado se fuga, el tribunal puede decomisar sus bienes sin que haya condena. La nueva reforma de la Ley sobre la Comisión Anticorrupción, que aun está siendo debatida en el Parlamento, establece que los tribunales pueden seguir adelante con un caso, con el fin de decomisar los bienes derivados de delitos de corrupción, aun cuando la causa penal haya sido sobreseída o la pena haya sido suspendida. La legislación nacional también prevé que la Dirección General de Seguridad pueda llevar a cabo una incautación provisional de bienes durante el proceso judicial.

A pesar de la existencia de un procedimiento administrativo para proteger a los denunciantes, es preciso promulgar una legislación especial sobre protección de testigos, peritos e informantes. En una fase posterior del proceso de examen (septiembre de 2011), las autoridades jordanas informaron de que la nueva reforma de la Ley sobre la Comisión Anticorrupción, que aún estaba siendo debatida en el Parlamento, introduce cuatro disposiciones relativas a la protección de testigos, peritos e informantes, según lo dispuesto en la Convención contra la Corrupción.

A ese respecto, las autoridades jordanas destacaron los obstáculos siguientes: la existencia de una coordinación interinstitucional deficiente; la falta de capacidad en materia de recursos humanos e infraestructura institucional; la falta de conocimiento de prácticas y programas avanzados de protección de testigos y de peritos; y los escasos recursos financieros para la aplicación.

Jordania también señaló que las formas de asistencia técnica que figuran a continuación contribuirían a aumentar la eficacia de la protección de testigos, peritos e informantes, a saber: un resumen de buenas prácticas y lecciones aprendidas; asesoramiento jurídico para elaborar los reglamentos necesarios que permitan aplicar las disposiciones legales pertinentes; desarrollo de medios destinados a las autoridades encargadas de establecer y gestionar los programas de protección; y asistencia *in situ* por técnicos especializados. Ninguno de esos tipos de asistencia ha sido prestado hasta el momento.

La legislación nacional permite que las personas que hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de un acto de corrupción puedan iniciar acciones judiciales ante un tribunal civil, con el fin de obtener una indemnización. Se trata de una disposición general que se aplica tanto a los casos de corrupción como a otros casos, dado que cualquier persona que haya sido perjudicada como consecuencia de un delito tiene la posibilidad, bien de fusionar la causa penal con la civil en un tribunal penal, o de iniciar un procedimiento civil independiente. Ahora bien, el acusado podrá solicitar que el tribunal civil deje en suspenso el procedimiento civil hasta que el juez en lo penal dicte sentencia definitiva.

En la actualidad, no existe en Jordania ningún marco jurídico para la negociación de los cargos y la condena, pero puede negociarse una reducción de la pena en función de las circunstancias. La nueva reforma de la Ley sobre la Comisión Anticorrupción, que todavía estaba debatiéndose en el Parlamento, prevé una reducción de dos tercios de la pena para quienes durante la investigación faciliten información o pruebas que conduzcan a la recuperación del producto de delitos de corrupción. Además, si se facilita a la Comisión Anticorrupción dicha información o pruebas, antes de que se descubra el caso de corrupción, podría conseguirse una exención total de la pena.

Jordania no ha celebrado ningún acuerdo o arreglo con otros Estados con el fin de conceder una reducción de la pena u otorgar inmunidad judicial a cambio de cooperación sustancial en los casos de delitos de corrupción. En ausencia de acuerdos jurídicos bilaterales o multilaterales, la cooperación se proporciona de acuerdo con las reglas de la cortesía internacional. La prestación de asistencia técnica mediante un resumen de prácticas óptimas y lecciones aprendidas sería de ayuda para Jordania a la hora de aplicar el párrafo 5 del artículo 37 de la Convención contra la Corrupción.

En el ámbito de la cooperación interinstitucional con fines de investigación y enjuiciamiento de delitos de corrupción, se han firmado varios memorandos de entendimiento entre las autoridades competentes. También se han firmado memorandos de entendimiento similares entre la Comisión Anticorrupción y la Oficina de Auditoría, institución independiente creada en virtud de la Constitución, con el mandato, principalmente preventivo, de auditar los ingresos y los gastos, así como las cuentas públicas del Estado, y de velar por el cumplimiento del reglamento financiero. Ahora bien, las operaciones sospechosas descubiertas en el curso de los trabajos de auditoría no se notifican directamente a la Comisión Anticorrupción; en primer lugar, se informa al ministro del ministerio pertinente y al Ministro de Hacienda, que establecen una comisión de investigación conjunta.

La cooperación interinstitucional y el intercambio de información con fines de investigación y enjuiciamiento de delitos de blanqueo de capitales, en particular, se promueven a través de la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (Unidad de Inteligencia Financiera). La evaluación de las actividades de Jordania en materia de lucha contra el blanqueo de dinero llevada a cabo por los expertos del grupo de examen puso de manifiesto que:

- Jordania tiene una unidad de inteligencia financiera operativa que gestiona el régimen de lucha contra el blanqueo de dinero en el país.
- La Unidad de Inteligencia Financiera está ubicada en el Banco Central de Jordania, si bien goza de un nivel considerable de autonomía financiera, administrativa y operativa. La Unidad tiene su propio presupuesto y su propio personal, y el director es nombrado por la Comisión Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero. La Comisión para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero no interfiere en las operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- La Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a las bases de datos de las autoridades nacionales pertinentes, y está facultada para solicitar información adicional a las instituciones informantes y a las autoridades competentes, en el ejercicio de sus funciones.
- Las inspecciones contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo son llevadas a cabo por el órgano regulador pertinente. Diversos reglamentos y manuales contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (a excepción del sector de los seguros) han sido elaborados con el fin de orientar a las instituciones informantes acerca de sus obligaciones, en virtud del régimen contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
- Según datos estadísticos de 2008, 2009 y 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió información sobre 195, 150 y 190 transacciones sospechosas, respectivamente. Se han adoptado las medidas de seguridad oportunas que garantizan la protección de la información pertinente.
- La Unidad de Inteligencia Financiera remitió 21 y 11 expedientes de inteligencia a la Comisión Anticorrupción en 2008 y 2009, respectivamente, aunque los funcionarios de la Comisión Anticorrupción no pudieron confirmar esos datos en el momento de la visita al país. La Comisión tampoco pudo confirmar si la información e inteligencia

aportada por la Unidad de Inteligencia Financiera dio lugar a algún enjuiciamiento o condena.

- Se necesita asistencia técnica para fortalecer la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- El hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera no forme parte del Grupo Egmont limita su capacidad para intercambiar información con algunas unidades de inteligencia financiera. Se están realizando esfuerzos para entrar en el Grupo Egmont. En la actualidad, la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero/Unidad de Inteligencia Financiera ha firmado memorandos de entendimiento con cuatro países en materia de intercambio de información. La Unidad no proporciona información o datos de forma espontánea a las unidades de inteligencia financiera, sino que estas han de solicitarlos.
- El secreto bancario se levanta en los casos previstos en la ley de ordenación de la banca. Cada caso se examina por separado. El Banco Central vela por que las entidades sujetas a su vigilancia y control respeten la ley. La Unidad de Inteligencia Financiera puede acceder a toda la información que necesite de las entidades informantes, en virtud de la legislación contra el blanqueo de dinero.
- El Banco Central de Jordania dispone de una serie de medidas para sancionar a los bancos que no cumplan la ley, incluidas sanciones administrativas, tales como amonestaciones, multas y revocación de licencias. En los últimos tiempos, no parece que se haya impuesto ninguna sanción administrativa. En los casos de infracción de la ley contra el blanqueo de dinero, se informa a la fiscalía para que inicie un procedimiento penal.
- Las normas emitidas por el Banco Central de Jordania tienen fuerza de ley y generan sanciones, ya que se emiten como legislación subsidiaria en virtud de la legislación principal.
- El Banco Central de Jordania acoge con satisfacción la idea de llevar a cabo inspecciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera en un futuro, para que esta pueda centrarse en cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero, mientras el banco se ocupa de cuestiones generales de cumplimiento.
- El régimen jordano de lucha contra el blanqueo de dinero no establece ningún límite para las transacciones en efectivo. Con el fin de aplicar con eficacia el artículo 23 de la Convención contra la Corrupción y la Ley contra el Blanqueo de Dinero, las autoridades jordanas podrán considerar oportuno establecer un límite a las transacciones en efectivo y exigir que estas se efectúen a través de instituciones financieras, dada la facilidad con que el dinero en efectivo puede ser objeto de operaciones de blanqueo. En ese contexto, las transacciones superiores a determinada cantidad deberán realizarse a través del sistema financiero. Ello generará un registro de control que facilitará la investigación y el enjuiciamiento en caso de corrupción.

Un factor clave para aumentar la eficacia de la cooperación entre los distintos organismos nacionales que se ocupan de la lucha contra la corrupción es la creación de una base nacional de datos penales albergada en la Comisión Anticorrupción, que aglutine información de distintos organismos. Se necesitaba asistencia técnica para el establecimiento de esa base de datos.

Tal y como se establece en el Código Penal, los delitos de corrupción están sujetos a las normas de la jurisdicción penal. Jordania ejerce su jurisdicción respecto de los actos cometidos en su territorio nacional, los actos cometidos por ciudadanos jordanos y los actos con relación a los que se deniega la extradición por razones de nacionalidad. Sin embargo, no se proporcionó información a los expertos del grupo de examen acerca de otras bases jurisdiccionales previstas en el artículo 42 de la Convención. Los expertos también destacaron la necesidad de establecer un mecanismo para fomentar la consulta entre las autoridades competentes de Jordania y otros Estados para los casos en que se puedan establecer varias jurisdicciones respecto de delitos de corrupción, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 42 de la Convención.

En términos generales y con respecto a los requisitos enunciados en la Convención en la esfera de la aplicación de la ley, las siguientes observaciones adicionales se señalan a la atención de las autoridades de Jordania. Convendría:

- Proseguir con los esfuerzos encaminados a reforzar la asunción de responsabilidades por parte del estamento judicial, aplicando de forma sistemática y rigurosa todos los medios legales y disciplinarios destinados a castigar la corrupción.
- Proseguir con los esfuerzos para terminar de elaborar y poner en marcha una ley específica sobre protección de testigos, peritos e informantes, y adoptar y aplicar las medidas administrativas oportunas para dar efecto a esa ley.
- Considerar la posibilidad de establecer un marco general sólido para el decomiso de bienes en ausencia de condena.
- Actualizar la legislación vigente con el fin de establecer un régimen más amplio y flexible de la jurisdicción penal en lo que respecta a los delitos de corrupción.
- Considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados, con el fin de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley puedan proponer una reducción de la pena o la concesión de inmunidad judicial a cambio de cooperación sustancial en los casos de delitos de corrupción.

Cooperación internacional

Además de ser uno de los primeros países árabes en firmar la Convención contra la Corrupción, Jordania acogió el primer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y pasó a integrar el programa piloto voluntario para examinar su aplicación. Jordania desempeña un papel clave en la iniciativa de buena gobernanza para el desarrollo de los países árabes y en su red de apoyo a la aplicación de la Convención contra la Corrupción en esos países. Jordania también participa en el Consejo de Ministros

Árabes de Justicia y el Consejo de Ministros Árabes del Interior, así como en el programa sobre gobernanza en la región árabe. Por otra parte, los expertos del grupo de examen estimaron que es una buena práctica que la Estrategia Nacional contra la Corrupción de Jordania cuente con un componente específico dedicado a la cooperación internacional.

Extradición

La extradición se rige por acuerdos bilaterales con otros países, que exigen que el delito sea punible tanto en el Estado requirente como en el requerido. El párrafo 2 del artículo 44 de la Convención no ha sido aplicado debido a que el principio de doble incriminación exigido en las relaciones de extradición con arreglo a acuerdos bilaterales y regionales se aplica con el máximo rigor. Es preciso prestar asistencia técnica en forma de asesoramiento jurídico, con el fin de adoptar un enfoque más flexible en esa materia.

La Ley de Extradición, promulgada en 1927, establece los criterios para la extradición de delincuentes, entre estos la pena mínima de un delito para que dé lugar a extradición (no menos de un año de prisión). Esa ley ya ha empezado a revisarse.

La información recopilada a lo largo del examen puso de manifiesto que Jordania mantiene una política de no extradición de sus nacionales, si bien, en su lugar, inicia acciones penales en su territorio y solicita el envío de pruebas al Estado requirente.

Como parte de los esfuerzos desplegados por la Liga Árabe en la región para unificar las legislaciones árabes, el Consejo de Ministros Árabes de Justicia ha adoptado la ley modelo árabe sobre asistencia judicial en materia penal, que podría utilizarse como base jurídica, si las partes interesadas están de acuerdo.

Jordania también es parte en el Acuerdo de Extradición de la Liga Árabe de 1952 y el Acuerdo Árabe de Riyadh sobre Cooperación Judicial de 1983.

Jordania ha firmado tratados o acuerdos bilaterales sobre extradición y cooperación judicial en materia penal con la República Árabe Siria, el Líbano, Turquía, Túnez, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, el Yemen, Argelia, Kuwait y Azerbaiyán.

Las autoridades nacionales aún no han informado al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de si consideran que la Convención contra la Corrupción puede ser utilizada como base jurídica para la extradición. Esa omisión fue indicada durante la visita al país. En una fase posterior del proceso de examen (septiembre de 2011), las autoridades jordanas informaron de que, a su debido tiempo, se enviará al Secretario General una notificación para explicar la posición de su país en la materia. Un comité especial convocado para examinar esa cuestión había recomendado que Jordania utilizase los acuerdos bilaterales y regionales como base jurídica para la extradición, en lugar de la Convención.

Desde un punto de vista operativo, la Dirección General de Seguridad alberga la Oficina Nacional de INTERPOL, que se ocupa de coordinar los aspectos prácticos de la extradición de delincuentes. En los casos de corrupción con dimensiones internacionales, la Comisión Anticorrupción colabora con la Oficina Nacional de INTERPOL.

En los casos en que Jordania interviene como Estado requerido, el proceso de extradición puede durar de 12 a 18 meses. No obstante, el proceso puede agilizarse si la documentación se presenta en debida forma (máximo cuatro meses). Las autoridades jordanas subrayaron que sería de gran utilidad recibir asistencia técnica en esa área.

Asistencia judicial recíproca

Con la integración de la Convención contra la Corrupción en el ordenamiento jurídico de Jordania, las autoridades jordanas pueden conceder peticiones de asistencia judicial recíproca en virtud de la Convención. En general, la asistencia judicial recíproca se concede con arreglo a lo dispuesto en los tratados, pero ha habido casos en que tales solicitudes han sido admitidas en ausencia de tratados. No hay ninguna restricción legal para prestar asistencia judicial recíproca con relación a personas jurídicas.

Cuando se efectuó la visita al país en marzo de 2011, Jordania no había notificado al Secretario General cuál era la autoridad central designada para recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca, con el fin de darles cumplimiento o remitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Tras la visita al país, Jordania informó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, mediante la nota verbal IO.15/468 de 29 de marzo de 2011, que el “Ministerio de Justicia es la única autoridad encargada de solicitar asistencia judicial en materia de corrupción”. El nombramiento fue dado por el Primer Ministro mediante documento escrito en 2010. La notificación fue, pues, enviada a la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas.

A efectos de dar pleno cumplimiento al párrafo 14 del artículo 46, las autoridades jordanas podrán considerar oportuno enviar una notificación similar con respecto al idioma en que han de presentarse las solicitudes de asistencia judicial recíproca para ser aceptadas, pese a que durante el proceso de examen se indicó que tales solicitudes debían presentarse en árabe. En una fase posterior del proceso de examen (septiembre de 2011), las autoridades jordanas informaron de que la notificación correspondiente sería enviada a su debido tiempo al Secretario General de las Naciones Unidas para expresar la decisión de Jordania al respecto. Casi con toda certeza el idioma será el árabe.

Normalmente, se exige que se cumpla la norma de doble incriminación con relación a las solicitudes de asistencia judicial recíproca presentadas. La asistencia puede ser denegada debido a que se trate de delitos de carácter político o militar, o cuando la ejecución de la solicitud pueda perjudicar la soberanía nacional o el orden público de Jordania.

Todas las solicitudes de asistencia judicial recíproca se canalizan tanto a través de la autoridad central como de las autoridades diplomáticas. Sin embargo, las solicitudes de asistencia judicial recíproca presentadas en el marco de la Convención contra la Corrupción son escasas; únicamente se registraron dos en 2008. El procedimiento de asistencia judicial concebido por la Dirección para la Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia está publicado en árabe en el sitio web del Ministerio.

Otras formas de cooperación internacional

Jordania está sujeta a las obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos regionales y bilaterales sobre traslado de personas condenadas, tales como el Acuerdo Árabe de Riyadh sobre Cooperación Judicial y los acuerdos bilaterales firmados con Chipre y Egipto.

Los miembros del grupo de examen señalaron que la aplicación del artículo 47 de la Convención contra la Corrupción sobre remisión de actuaciones penales podría ser problemática, dado que no parece haber ningún marco interno que facilite dicha remisión, en especial en situaciones en que el Estado requirente no es parte en la Convención y tampoco tiene un tratado con Jordania.

Jordania no ha celebrado ningún acuerdo o arreglo bilateral o multilateral en materia de cooperación entre organismos encargados de hacer cumplir la ley. No obstante, considera que la Convención contra la Corrupción constituye la base para esta cooperación en relación con los delitos comprendidos en la misma. Entre las dificultades encontradas en materia de cooperación en ese ámbito se encuentran las deficiencias en la cooperación interinstitucional, así como la falta de capacidad y recursos para la aplicación. Además, Jordania carece de experiencia práctica a la hora de establecer equipos mixtos de investigación.

Con el fin de garantizar una aplicación más eficaz a nivel nacional de los artículos 48 y 49 relativos a la cooperación en materia de cumplimiento de la ley y realización de investigaciones conjuntas, respectivamente, Jordania desearía recibir asistencia técnica en forma de: un resumen de buenas prácticas y lecciones aprendidas; acuerdos y arreglos modelo que puedan servir de base para la elaboración de instrumentos bilaterales; asistencia tecnológica (por ejemplo, para la configuración y gestión de bases de datos y sistemas de intercambio de información); programas que permitan dotar de mayor capacidad a las autoridades responsables de la cooperación en materia de represión transfronteriza; y elaboración de un plan de acción para la aplicación. Además, Jordania necesita asistencia técnica para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para establecer o mejorar los canales de comunicación con las autoridades, los organismos y los servicios encargados de hacer cumplir la ley de los demás Estados parte.

Las observaciones que figuran *infra* se formulan con objeto de ayudar a las autoridades nacionales a aumentar la eficacia y solidez de los mecanismos de cooperación internacional. Convendría:

- Estudiar la posibilidad de flexibilizar el rigor con que se aplica el principio de doble incriminación en los casos de delitos comprendidos en la Convención contra la Corrupción, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 44 de la Convención.
- Velar por que todo delito tipificado a tenor de lo dispuesto en la Convención no sea considerado o definido como un delito político que pueda obstaculizar la extradición.
- Seguir haciendo todo lo posible para lograr que los procedimientos de extradición se lleven a cabo en el plazo más breve posible.

- Adoptar medidas inmediatas, según corresponda, con el fin de determinar si la Convención puede ser utilizada como base jurídica a efectos de extradición.
- Considerar la posibilidad de modificar el ordenamiento jurídico interno con el fin de facilitar más la prestación de asistencia judicial recíproca en determinadas circunstancias, incluso en ausencia de doble incriminación.
- Seguir estudiando las oportunidades de participar activamente en arreglos de extradición bilaterales y multilaterales con otros países, a fin de aumentar la eficacia de las extradiciones, la prestación de asistencia judicial recíproca, la remisión de los procedimientos penales y otras formas de cooperación internacional en asuntos penales, haciendo especial hincapié en la cooperación para la aplicación de la ley y las investigaciones conjuntas.
- Terminar de ultimar el proceso de notificación en relación con la utilización de la Convención como base jurídica para la extradición y, en el ínterin, celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados parte y Estados no parte en la Convención para fortalecer los mecanismos de extradición.

Santo Tomé y Príncipe

Ordenamiento jurídico

Santo Tomé y Príncipe firmó la Convención el 8 de diciembre de 2005 y la ratificó el 12 de abril de 2006. Santo Tomé y Príncipe depositó el 12 de abril de 2006 su instrumento de ratificación en poder del Secretario General. La ley de aplicación está contenida en la Resolución 37/VII/05, que fue aprobada por el Parlamento el 24 de noviembre de 2005 y promulgada mediante el Decreto Presidencial 5/2006. Entró en vigor el 15 de mayo de 2006, el mismo día en que fue publicada, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución de Santo Tomé y Príncipe. En el artículo 13 se dispone que las normas generalmente aceptadas del derecho internacional y los tratados internacionales que hayan sido ratificados por una ley del Parlamento y hayan entrado en vigor, formarán parte integrante del derecho interno de Santo Tomé y Príncipe. En teoría, los tratados internacionales prevalecen sobre la legislación interna, pero es preciso adoptar una ley que los aplique para que tengan efecto directo en el ordenamiento jurídico interno, a tenor del artículo 37.1 de la Constitución.

El Código Penal de 1886 contiene la mayoría de los delitos tipificados por la Convención contra la Corrupción y actualmente está siendo sometido a revisión, con el fin de reformarlo. La Ley 8/2003 sobre malversación simple, malversación cualificada y peculado, y la Ley 15/2008, sobre conversión, transferencia u ocultación de bienes y productos también tienen por objeto aplicar las disposiciones de la Convención. El Código de Procedimiento Penal se aplica a las fases de investigación, procesamiento y juicio del procedimiento penal.

Santo Tomé y Príncipe es una jurisdicción de derecho civil que ha adoptado la mayor parte de su ordenamiento jurídico interno de Portugal.

En 2009, el Parlamento aprobó una serie de enmiendas al Código Penal, pero fueron vetadas por el Presidente de la República. El Ministro de Justicia explicó a los

expertos gubernamentales que la reforma fue vetada por cuatro cuestiones técnicas que afectaban a delitos específicos no relacionados con la Convención contra la Corrupción. El Ministro de Justicia señaló que este año se presentaría al Parlamento un nuevo proyecto de código penal, que tendría en cuenta esas cuatro cuestiones.

Conclusiones generales

El marco legislativo de Santo Tomé y Príncipe ofrece una base para penalizar los delitos tipificados en la Convención. Las modificaciones pendientes al Código Penal, la aplicación del Programa de Gobierno para combatir la corrupción y la puesta en práctica de las recomendaciones de los expertos gubernamentales darán lugar a una sólida estructura.

Por lo general, el Ministerio de Justicia es el órgano encargado de combatir la corrupción. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial, creada a finales de 2010, se va a convertir en el órgano policial especializado en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. A medida que comience a funcionar, esa unidad será un elemento esencial en el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación de la ley existentes en Santo Tomé y Príncipe, principalmente, entre el Ministerio de Justicia, la Policía Judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central.

La cooperación internacional según lo dispuesto en el Convenio, así como en materia de corrupción es, en general, algo nuevo en Santo Tomé y Príncipe, y no se tiene mucha experiencia en ese ámbito. Si bien la cooperación internacional suele desarrollarse con los miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, se ha tratado de extender esa práctica a otros países, principalmente en la región. Santo Tomé y Príncipe también es miembro de la INTERPOL.

Penalización y aplicación de la ley

Penalización

El marco legislativo de Santo Tomé y Príncipe penaliza la mayoría de los delitos incluidos en la Convención contra la Corrupción. Estos están tipificados en el Código Penal, la Ley 8/2003 y la Ley 15/2008. Recientemente, se ha preparado una serie de modificaciones legislativas al Código Penal, que aún deben acometerse. Esas modificaciones abarcan un amplio espectro de áreas; concretamente, incluyen el soborno activo y pasivo de funcionarios públicos nacionales, el abuso de funciones, la participación en la comisión de delitos de blanqueo de dinero y la tentativa de cometer dichos delitos, así como la ampliación del grupo de delitos considerados delitos determinantes.

Santo Tomé y Príncipe no penaliza el enriquecimiento ilícito como delito autónomo. Existen restricciones constitucionales relativas a la presunción de inocencia que obstaculizan la aplicación del artículo 20 de la Convención.

Un ejemplo de buenas prácticas señalado por los evaluadores en relación con el artículo 22 de la Convención (Malversación o peculado de bienes en el sector privado) es que en Santo Tomé y Príncipe las sanciones impuestas por malversación o peculado se agravan en función del valor de los bienes objeto de malversación y teniendo en cuenta en calidad de qué el autor del delito recibió esos activos.

Si bien los evaluadores tomaron nota de los proyectos de reforma que están en marcha, en el examen se llegó a la conclusión de que podrían introducirse mejoras en algunos aspectos. Así pues, se recomienda que Santo Tomé y Príncipe adopte las medidas que figuran a continuación. Convendría:

- a) Penalizar el soborno activo de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas;
- b) Suministrar ejemplares de la legislación contra el blanqueo de dinero al Secretario General de las Naciones Unidas, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo 23 de la Convención contra la Corrupción;
- c) Penalizar la obstrucción de la justicia con arreglo al párrafo a) del artículo 25 de la Convención.

Con respecto a las disposiciones facultativas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Santo Tomé y Príncipe estudiará la posibilidad de adoptar las medidas siguientes para aumentar la eficacia de sus disposiciones internas. Convendría:

Penalizar el soborno pasivo de los funcionarios públicos extranjeros y los funcionarios de organizaciones internacionales públicas, el tráfico de influencias en sus formas activa y pasiva, y el soborno en el sector privado.

Aplicación de la ley

Las disposiciones relativas a la aplicación de la ley están incluidas en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Estatuto del Funcionario Público, la Ley 5/2002, la Ley 3/2003, la Ley 8/2003 y la Ley 15/2008. Las enmiendas propuestas al Código Penal contemplan, además, la responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas, y el enjuiciamiento de los cómplices.

En su Ley 5/2002, Santo Tomé y Príncipe parece encontrar un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y el hecho de garantizar su presencia en los procedimientos judiciales. Asimismo, la Ley 3/2003 establece que cuando se concede la libertad condicional, esta ha de ser igual a la condena cumplida, con el fin de facilitar el proceso de reinserción social. El Estatuto del Funcionario Público establece el procedimiento mediante el cual un funcionario público acusado debe ser penalizado (por ejemplo, multas, suspensión, rescisión), mientras que el Código Penal permite que el juez ejerza su facultad discrecional y pueda inhabilitar a una persona declarada culpable para ocupar un cargo público. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas de Santo Tomé y Príncipe también tiene un papel importante que desempeñar, ya que es el único órgano facultado para examinar y considerar los asuntos puestos en su conocimiento (esto es, por instituciones o individuos), que también pueden estar relacionados con temas de corrupción. El Tribunal no tiene competencia administrativa para intervenir en un caso determinado, pero puede considerar tres tipos de sanciones o medidas: disciplinarias, financieras y penales. No obstante, cabe señalar que el Tribunal no puede dictar sentencias o imponer sanciones penales. Si hay razones para creer que ha habido actividad penal, el asunto debe ser remitido a los tribunales ordinarios por conducto del ministerio fiscal. El Tribunal puede examinar cualquier asunto de su competencia (esto es, financiera) y en ese sentido, podrá levantar todo privilegio e inmunidad. También se comprobó que en virtud de la Ley orgánica del Parlamento, puede levantarse la

inmunidad funcional de los parlamentarios si hay pruebas concretas y suficientes que indiquen que ha habido delito de corrupción. Por otro lado, el levantamiento del secreto bancario podrá dictarse a criterio de un juez, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y el principio de indemnización por daños y perjuicios establecido en el Código Civil.

La recientemente creada Unidad de Delitos Económicos va a ponerse en marcha y para que sea eficaz será necesario dotarla de los medios necesarios para desempeñar sus funciones, lo que incluye su personal, que deberá gozar de la formación adecuada y los recursos suficientes para llevar a cabo su labor. Hay cooperación entre los distintos organismos públicos nacionales. Así por ejemplo, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 15/2008, el Fiscal General del Estado debe ser informado de inmediato acerca de toda transacción sospechosa. Esa información puede provenir del Banco Central, el Ente Supervisor de Juegos de Azar, las cámaras de abogados, la Inspección General de Actividades Económicas, la Dirección General de Notarios, la Cámara de Auditores y el Colegio de Abogados. En lo que atañe a las transacciones sospechosas, no se hizo referencia alguna al papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta fue creada por la Ley 15/2008 y el Decreto 60/2009, si bien no existe armonización entre ambos instrumentos. El artículo 4 b) del Decreto 60/2009 exige que la Unidad de Inteligencia Financiera sea la primera en ser informada acerca de transacciones sospechosas y que, a continuación, esta informe al Fiscal General. Se están redactando nuevas enmiendas con miras a que la Ley 15/2008 haga mención también del papel de la UIF.

Santo Tomé y Príncipe ha establecido el “principio de territorialidad”, de conformidad con el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. El “principio de protección” previsto en la Ley 15/2008 únicamente se refiere a los delitos relacionados con la ocultación y el blanqueo de dinero. El tratado en materia judicial celebrado con Portugal fue citado como ejemplo de los casos en que Santo Tomé y Príncipe puede tener jurisdicción sobre delitos cometidos en Portugal, cuando el presunto autor se encuentre en su territorio nacional. Por otra parte, el ordenamiento jurídico de Santo Tomé y Príncipe establece el principio de *nullum crimen sine lege*, según el cual únicamente puede haber proceso penal si el acto cometido constituye delito en virtud de una ley vigente.

Con respecto a las disposiciones facultativas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Santo Tomé y Príncipe estudiará la posibilidad de adoptar las medidas siguientes para aumentar la eficacia de sus disposiciones internas. Convendría:

- a) Utilizar facultades legales discrecionales en relación con el enjuiciamiento de personas, con el fin de aumentar la eficacia de las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley;
- b) Establecer procedimientos que permitan inhabilitar a las personas declaradas culpables para ocupar cargos en una empresa que sea en parte propiedad del Estado;
- c) Adoptar medidas, por ejemplo de índole legislativa, con el fin de mejorar el marco existente para la aplicación del artículo 31 de la Convención contra la Corrupción (Embargo preventivo, incautación y decomiso);

- d) Promulgar leyes de gran alcance en materia de protección de testigos y denunciantes;
- e) Promulgar leyes que incluyan la mitigación de la pena y tengan presentes los casos en que el autor del delito ayude a las autoridades competentes en la investigación o enjuiciamiento de un delito mediante la prestación de cooperación sustancial, así como la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial;
- f) Celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados parte en los casos en que la cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sea beneficiosa;
- g) Establecer su jurisdicción con respecto al principio de personalidad (activa y pasiva) y el principio de protección, así como cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no sea extraditable, al ser uno de sus nacionales. Cuando se considere oportuno, consultar con otros Estados parte que estén llevando a cabo una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos a fin de coordinar sus acciones.

Cooperación internacional

Extradición

En materia de extradición, Santo Tomé y Príncipe se vale del Tratado Judicial con Portugal sobre la Prohibición de la Extradición y el Convenio sobre Extradición de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (actos determinantes de extradición). No obstante, en virtud del artículo 37.2 de la Constitución, la legislación interna debe dar efecto a los acuerdos internacionales en Santo Tomé y Príncipe. Se están negociando otros acuerdos de extradición con la Unión Africana y a nivel subregional. Cuando no existe acuerdo o arreglo, se estudia cada caso de extradición por separado. En principio, la Convención podría utilizarse como base jurídica para la extradición, pero ello no ha sido notificado al Secretario General de las Naciones Unidas, ni tampoco se ha puesto en práctica hasta la fecha.

En principio, el derecho interno de Santo Tomé y Príncipe considera que los delitos previstos en la Convención contra la Corrupción son delitos que dan lugar a extradición, siempre que cumplan el requisito de doble incriminación. Ahora bien, dado que Santo Tomé y Príncipe no ha penalizado todos los delitos previstos en la Convención, el requisito de doble incriminación hace que algunos delitos contemplados en esta no den lugar a extradición. Por otra parte, de conformidad con la Constitución, Santo Tomé y Príncipe no concede la extradición de sus ciudadanos. No pudo determinarse si el Código de Procedimiento Penal permitía el reconocimiento y la ejecución de sentencias penales extranjeras en Santo Tomé y Príncipe.

Se recomienda que Santo Tomé y Príncipe adopte medidas adecuadas con objeto de:

- a) Intensificar los esfuerzos destinados a dar efecto a las leyes internas que permitan aplicar los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales presentes o futuros, y prever los requisitos necesarios de fondo y de procedimiento, incluida la pena mínima exigida;
- b) Aplicar el principio de *aut dedere aut judicare*;

c) No denegar la extradición únicamente porque se considere que el delito entraña cuestiones tributarias;

d) Consultar con el Estado parte requirente antes de denegar la extradición.

Con respecto a las disposiciones facultativas de la Convención contra la Corrupción, Santo Tomé y Príncipe estudiará la posibilidad de adoptar las medidas siguientes para aumentar la eficacia de sus disposiciones internas. Convendría:

a) Convertir la Convención en la base jurídica de la extradición, o bien alentar a las autoridades nacionales a que prosigan con los esfuerzos en curso encaminados a celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de extradición;

b) Establecer procedimientos más expeditos de extradición y simplificar los requisitos en materia de pruebas;

c) Rechazar una solicitud de extradición cuando existan motivos fundados para considerar que se ha formulado con el fin de enjuiciar o sancionar a una persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas u otros motivos conexos.

Traslado de personas condenadas y procedimientos penales

El Convenio sobre traslado de personas condenadas entre los Miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y el Convenio sobre Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa regulan el traslado de personas condenadas y los procedimientos penales entre los miembros de esa comunidad, respectivamente.

Santo Tomé y Príncipe estudiará la posibilidad de adoptar las medidas siguientes para aumentar la eficacia de sus disposiciones internas. Convendría:

a) Intensificar los esfuerzos destinados a poner en práctica leyes internas que permitan dar efecto a los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre traslado de personas condenadas, presentes o futuros;

b) Celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales similares con Estados que no pertenezcan a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa;

c) Adoptar una práctica, política o disposición mediante la cual se reglamente la posibilidad de remitir las actuaciones penales a Estados que no sean miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.

Asistencia judicial recíproca

En ese ámbito, Santo Tomé y Príncipe se atiene principalmente al Tratado Judicial con Portugal y a un acuerdo bilateral con Angola, así como al Convenio sobre Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que ha firmado, pero aún no ha ratificado.

No hay ninguna disposición interna relativa al requisito de la doble incriminación respecto de la asistencia judicial recíproca. No obstante, durante la visita al país, se confirmó que ese principio debe cumplirse. Hasta la fecha Santo Tomé y Príncipe no ha realizado ni ha recibido ninguna solicitud de asistencia judicial recíproca en materia de corrupción.

Durante la visita al país, se informó a los expertos gubernamentales de que el Ministerio de Justicia de Santo Tomé y Príncipe es la autoridad central encargada de la asistencia judicial recíproca. El Secretario General de las Naciones Unidas aún no ha recibido ninguna notificación. Esas solicitudes, así como toda información conexa, han de tramitarse por vía diplomática. En caso de urgencia, las solicitudes y las comunicaciones conexas también pueden dirigirse a Santo Tomé y Príncipe por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal.

Se recomienda que Santo Tomé y Príncipe adopte medidas adecuadas con objeto de:

- a) Intensificar los esfuerzos destinados a poner en práctica leyes internas que permitan dar efecto a los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales de asistencia judicial recíproca presentes o futuros;
- b) Prestar la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la Convención contra la Corrupción, de los que también puede ser responsable una persona jurídica;
- c) Garantizar la confidencialidad de la información recibida y no denegar la asistencia judicial recíproca invocando el secreto bancario;
- d) Prestar asistencia que no entrañe medidas coercitivas de conformidad con el párrafo 9 b) del artículo 46 de la Convención contra la Corrupción;
- e) Notificar al Secretario General de las Naciones Unidas la autoridad central encargada de la asistencia judicial recíproca, así como el idioma o los idiomas que son aceptables para Santo Tomé y Príncipe, de conformidad con los párrafos 13 y 14 del artículo 46 de la Convención;
- f) Respetar la regla de la especialidad y garantizar que la solicitud cumpla todos los requisitos previstos en el párrafo 15 del artículo 46 de la Convención contra la Corrupción;
- g) Prever consultas obligatorias con el Estado parte requirente antes de rechazar una solicitud y de aplazar su ejecución;
- h) Otorgar protección a los testigos, peritos y otras personas que accedan a declarar.

En lo que respecta a las disposiciones facultativas de la Convención contra la Corrupción, Santo Tomé y Príncipe estudiará la posibilidad de adoptar las medidas siguientes para aumentar la eficacia de sus disposiciones internas. Convendría:

- a) Ratificar el Convenio sobre Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y darle efecto;
- b) Transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado parte con arreglo a los párrafos 4 y 5 del artículo 46 de la Convención, así como suministrar al Estado parte requirente copia de los expedientes, los documentos o la información del Gobierno que no estén a disposición del público en general;
- c) No permitir que se vean afectadas las obligaciones contraídas en virtud de otros tratados mediante los que se rija o pueda regirse la asistencia judicial

recíproca, ni enjuiciar, detener, condenar o someter a ninguna otra restricción de libertad personal a una persona trasladada;

d) Utilizar la Convención como base jurídica de las solicitudes de asistencia judicial recíproca y comunicar ese hecho al Secretario General de las Naciones Unidas;

e) Establecer un marco jurídico amplio que permita el traslado a Santo Tomé y Príncipe y desde este de las personas cuya presencia se solicite, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 10 y 11 del artículo 46 de la Convención, o bien autorizar que una audiencia se celebre por videoconferencia;

f) Preparar un documento sobre prácticas relativo a la tramitación de las solicitudes de asistencia judicial recíproca con relación al costo y los plazos, con miras a que las instituciones y organismos pertinentes conozcan mejor esos aspectos.

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

En lo que respecta a la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, Santo Tomé y Príncipe se vale del Tratado Judicial con Portugal, el Convenio sobre Extradición de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (actos determinantes de extradición), el Convenio sobre Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal entre la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y los acuerdos con los organismos de los que es miembro (como por ejemplo, la INTERPOL).

Se recomienda que Santo Tomé y Príncipe adopte medidas adecuadas con objeto de:

Intensificar los esfuerzos destinados a poner en práctica leyes internas que permitan dar efecto a los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales, presentes o futuros sobre cooperación en materia de cumplimiento de la ley, teniendo presente la adopción de medidas eficaces, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 48 de la Convención contra la Corrupción.

En lo que respecta a las disposiciones facultativas de la Convención contra la Corrupción, Santo Tomé y Príncipe estudiará la posibilidad de adoptar las medidas siguientes para aumentar la eficacia de sus disposiciones internas. Convendría:

a) Estudiar la posibilidad de que la Convención contra la Corrupción constituya la base para la cooperación recíproca en materia de cumplimiento de la ley;

b) Facilitar la cooperación directa entre los órganos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley y los órganos de Santo Tomé y Príncipe, incluso mediante el uso de tecnologías modernas.

Investigaciones conjuntas y técnicas especiales de investigación

Durante la visita al país, Santo Tomé y Príncipe afirmó que lleva a cabo investigaciones conjuntas con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, si bien el fundamento jurídico específico no se indicó. La Policía Judicial es la autoridad encargada de ese tema en Santo Tomé y Príncipe.

De conformidad con el nuevo Código de Procedimiento Penal, un juez de Santo Tomé y Príncipe puede autorizar la utilización de técnicas especiales de investigación.

En lo relativo a las disposiciones facultativas de la Convención, Santo Tomé y Príncipe estudiará la posibilidad de adoptar las medidas siguientes para aumentar la eficacia de sus disposiciones internas. Convendría:

- a) Celebrar acuerdos o arreglos sobre investigaciones conjuntas y la utilización de técnicas especiales de investigación, considerando las entidades que sufragarán los gastos correspondientes en el plano internacional;
- b) Intensificar los esfuerzos destinados a aplicar leyes internas que permitan dar efecto a los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales, presentes o futuros, sobre investigaciones conjuntas y utilización de técnicas especiales de investigación, y en ausencia de estos estudiar esa posibilidad caso por caso;
- c) Prever una estructura que permita definir el alcance y la forma en que esas investigaciones se llevarán a cabo, incluido el uso de la entrega vigilada.

Capacitación y asistencia técnica

Santo Tomé y Príncipe se enfrenta a varios desafíos: en primer lugar, la reducida capacidad y recursos de que dispone; en segundo lugar, la existencia de determinadas características propias y la ineficacia de las medidas normativas vigentes, tales como leyes y reglamentos; y, por último, el hecho de que el país también tiene otras prioridades que ha de atender.

Las principales prioridades de Santo Tomé y Príncipe en materia de asistencia técnica son la necesidad de dotarse de capacidad institucional y el apoyo legislativo. En cuanto a la capacidad institucional, entre otras cosas sería necesario elaborar un plan de acción para la aplicación, prestar asistencia sobre el terreno y poner en marcha programas encaminados a dotar de capacidad a las autoridades competentes en la aplicación de la Convención. El apoyo legislativo ha de incluir, entre otras cosas, facilitar leyes y tratados modelo, prestar asistencia en materia de redacción de leyes y asesoramiento jurídico. Los miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, en especial Portugal y el Brasil, han ofrecido cierta asistencia técnica, si bien esta no ha tenido por objeto la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.